

INFORME RIESGO PAÍS

BURKINA FASO

Madrid, 26 de julio de 2023

BURKINA FASO

Grave deterioro de la situación de seguridad a raíz del terrorismo yihadista, lo que ha derivado en una crisis política. En 2022 se sucedieron dos golpes de Estado, ambos so pretexto de la inacción gubernamental frente a los grupos terroristas. Los ataques yihadistas se han intensificado en los últimos años y dejan ya más de 10.000 víctimas mortales, más de 2 millones de desplazados y aproximadamente la mitad del territorio fuera del control efectivo de las autoridades. El actual líder de la junta militar que gobierna el país, Ibrahim Traoré, es particularmente popular entre la ciudadanía. Traoré ha apostado por la reforma del ejército y un cuantioso incremento del gasto militar. Aunque la junta militar se ha comprometido a la vuelta a un régimen civil vía elecciones en julio de 2024, existen dudas de que se puedan llevar a cabo, habida cuenta de la crisis de seguridad.

Reaproximación a los organismos internacionales. La relación con las principales IFI y con los tradicionales socios occidentales se deterioró a raíz del golpe y del aparente acercamiento a Rusia. No obstante, la actitud dialogante de la junta militar le ha permitido eludir la aplicación de sanciones económicas por parte de la CEDEAO y, recientemente, lograr un voto de confianza del FMI.

Precaria estructura económica, pero buenas expectativas de crecimiento. El elevado peso de la economía informal y la dependencia de las exportaciones de *commodities* caracterizan a esta economía que, no obstante, ha crecido a buen ritmo en los últimos años (exceptuando los ejercicios de 2020 y 2022). En 2023 y 2024 se espera una paulatina recuperación del ritmo de crecimiento gracias, especialmente, al mayor desarrollo del sector aurífero.

Crónico desequilibrio fiscal. En 2022 el déficit público alcanzó un nivel muy elevado (10,3% del PIB) por el elevado gasto armamentístico y los excepcionalmente altos subsidios a alimentos y petróleo. Deuda moderada (54,3% del PIB); pero está ganando peso la financiación doméstica, más cara y a menor plazo.

Balanza por cuenta corriente deficitaria. Vulnerable a la evolución de los precios internacionales del oro y el algodón, las principales exportaciones. En 2022, déficit por cuenta corriente equivalente al 5,2% del PIB. Deuda exterior reducida (25,3% del PIB) y DSA moderado.

1. SITUACIÓN POLÍTICA

- ➔ Profunda crisis política a raíz del grave deterioro de la situación de seguridad por la presencia de grupos yihadistas, especialmente en el norte y este del país. En 2022 tuvieron lugar dos golpes de Estado, cuya motivación declarada era la incapacidad de los gobernantes para lograr avances en la lucha contra el terrorismo.
- ➔ La junta militar que gobierna el país se ha comprometido con la CEDEAO a celebrar elecciones democráticas en julio de 2024. Existen dudas sobre la capacidad de cumplir con este calendario: grandes extensiones del territorio están fuera del control efectivo de las autoridades; en ellas sería imposible garantizar una votación libre y justa, lo que dejaría sin legitimidad a los resultados de los comicios.
- ➔ La relación con los socios occidentales (especialmente Francia) se ha deteriorado a raíz de lo que Uagadugú percibe como escaso apoyo en la lucha contra el terrorismo. Los fracasos militares de Francia en el Sahel han aumentado el sentimiento antifrancés entre la población y llevado a las autoridades burkinesas a diversificar sus relaciones exteriores, aproximándose a países como Rusia. No obstante, mantiene una actitud dialogante con todos los actores internacionales.
- ➔ Aunque el apoyo financiero internacional se ha ralentizado como muestra del rechazo a la toma de poder inconstitucional, en los últimos meses se observa un nuevo acercamiento por parte de las IFI. El FMI ha aprobado financiación por valor de 80 mill.\$ para luchar contra la crisis alimentaria a la que se enfrenta el país, y ha firmado también un preacuerdo (tipo ECF) de 300 mill.\$ para contribuir a aliviar las necesidades de la balanza de pagos.

INESTABILIDAD POLÍTICA POR LA CRISIS DE SEGURIDAD

Burkina Faso ha experimentado en los últimos años una profunda crisis política, durante la que han tenido lugar dos golpes de Estado (ambos en 2022). Aunque las asonadas militares han sido muy habituales a lo largo de la historia poscolonial del país, las últimas dos se han producido en el contexto de una muy deteriorada situación de seguridad por la presencia de grupos yihadistas, lo que ha puesto al país en una difícil encrucijada.

| | |
|----------------------|-------------------------|
| POBLACIÓN | 22,7 mill. hab. |
| RENTA PER CÁPITA | 840 \$ |
| RENTA PER CÁPITA PPA | 2.400 \$ |
| EXTENSIÓN | 274.000 Km ² |
| RÉGIMEN POLÍTICO | Junta militar |
| CORRUPCIÓN | 77/180 |

Datos a 2022

En 2014 se puso fin a 27 años de presidencia de Blaise Compaoré, que estaba al frente de un régimen formalmente democrático, pero con claros tintes autoritarios. Compaoré, que intentó reformar la Constitución para poder optar a un nuevo mandato, se vio obligado a renunciar a la jefatura de Estado como consecuencia de las multitudinarias protestas en su contra, y huyó finalmente a Costa de Marfil. Se estableció un gobierno interino, encargado de llevar a cabo la transición política que, aunque sufrió un intento de golpe de Estado (por parte de un regimiento favorable al partido de Compaoré), pudo organizar elecciones libres, transparentes y avaladas por observadores internacionales en noviembre de 2015.

Con la victoria de Roch Marc Christian Kaboré (con un 53,5% de los votos), del partido Movimiento del Pueblo para el Progreso, se consumó la primera alternancia pacífica del poder

en Burkina Faso, y con ello dio comienzo a una etapa de renovación política, alejada de la gestión autoritaria de su predecesor y con cuantificables mejoras en materia de gobernanza. No obstante, también en 2015 comenzó la crisis de seguridad derivada de la expansión de terroristas yihadistas en el norte y este del país; si se observa con perspectiva temporal, y sin restar dificultad a su cometido, la gestión de Kaboré fue deficiente, y muchos observadores responsabilizan a su actuación de la actual coyuntura. A lo largo de su mandato, el Estado perdió paulatinamente el control de grandes partes del territorio. Tampoco hubo avances significativos en materia económica y social, algo que empeoró con el impacto de la pandemia de covid-19.

Pese a la pandemia, las elecciones generales de noviembre 2020 se pudieron celebrar según calendario, y Kaboré fue reelegido con un 57,7% de los votos. Aunque la jornada tuvo lugar sin incidentes, los comicios estuvieron empañados por la situación de seguridad que, según la Comisión Electoral, impidió el registro de votantes en un 17% del territorio. Durante 2021, con la pandemia todavía como telón de fondo, la crisis terrorista se fue intensificando: el número de muertos y de desplazados crecía, del mismo modo que lo hacían las áreas fuera de control gubernamental. Las fuerzas militares extranjeras, aunque siempre victoriosas en sus enfrentamientos con los yihadistas, no eran capaces de frenar la expansión a gran escala, mientras que el ejército nacional estaba al límite de sus capacidades. Para empeorar las cosas, la escasez de armas y otro equipamiento era acuciante y se convirtió en una queja habitual entre los miembros de las fuerzas de seguridad, que el gobierno de Kaboré no solventó. El punto de inflexión llegó con el atentado de Inata, al norte del país, el 14 de noviembre de 2021: 53 gendarmes fueron asesinados, en lo que constituye el ataque a militares más letal de la historia del país. No obstante, fueron las condiciones en las que se encontraban los soldados lo que causó la total indignación de población y ejército: la prensa reveló que llevaban días sin acceso a comida y que sus peticiones de ayuda a sus superiores fueron desatendidas.

El gobierno de Kaboré quedó profundamente debilitado tras este atentado, mientras que el enfado ciudadano crecía. El 22 de enero de 2022 se produjeron graves altercados durante las manifestaciones celebradas en Uagadugú y en Bobo Dioulasso (la segunda ciudad más poblada del país) y un grupo de soldados se rebeló. Aunque inicialmente las autoridades minimizaron la crisis política, las protestas continuaron en la capital y el gobierno comenzó a negociar con los rebeldes. Durante las conversaciones, varios gendarmes hasta entonces leales a Kaboré decidieron unirse a los golpistas. En la mañana del 24 de enero, Kaboré firmó su dimisión y los soldados aparecieron en la televisión para anunciar el derrocamiento y el establecimiento de una junta militar de transición, que justificó su actuación por la “severa inseguridad y extendida corrupción”⁽¹⁾.

Tanto el golpe como, posteriormente, la junta militar estaban liderados por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, que comandaba la región militar del centro del país, la mayor en tamaño y que incluye la capital. Damiba se formó en el mejor centro militar de Burkina Faso (Prytanée Militaire du Kadiogo) y se graduó en la parisina École de Guerre⁽²⁾, además de tener una larga experiencia sobre el terreno en la lucha antiterrorista. Su ascenso al poder fue celebrado por civiles y militares, viendo en él una esperanza de cambio. Como primer ministro nombró a Albert Ouédraogo, un profesor universitario de Economía, sin experiencia previa en

-
- (1) Aunque inicialmente el golpe se describió como incruento, un mes más tarde la oficina de presidencia anunció que dos civiles habían muerto como consecuencia de “balas perdidas”.
- (2) Allí coincidió con Mamady Doumbouya, actual líder de la junta militar que gobierna Guinea.

puestos políticos. El resto del gabinete se compuso tanto por nombres muy conocidos en la política burkinesa⁽³⁾ como por líderes sindicales y de la sociedad civil.

La reacción internacional fue de rechazo al golpe de Estado, mientras que la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) suspendieron inmediatamente la participación de Burkina Faso. De todas formas, los actores internacionales se abstuvieron de aplicar sanciones económicas al país, optando por una línea dialogante⁽⁴⁾. La CEDEAO y la junta militar, tras meses de negociaciones, acordaron establecer un periodo de transición al régimen civil de 24 meses (aunque Damiba inicialmente propuso 36), determinando que se celebrarían elecciones en julio de 2024.

En paralelo, el apoyo popular a Damiba iba decayendo según pasaban los meses y no se materializaban ni las reformas en el ejército ni los avances contra los yihadistas. Los atentados terroristas se intensificaron en la primavera, provocando un elevado número de muertes civiles (en la primera mitad de 2022 se produjeron tantas víctimas como durante todo 2021) y la destrucción de infraestructuras de transporte y energía. A la par, los abusos contra los civiles por parte de unas desmoralizadas fuerzas de seguridad también aumentaron. Todo ello minó la confianza de la población en el Estado y aumentó el recelo hacia la junta militar. Otro de los errores de Damiba fue convocar una reunión con los expresidentes del país en julio: tres de los cinco invitados rechazaron participar por la presencia de Compaoré., que pocos meses antes había sido condenado a cadena perpetua *in absentia* por su rol en el asesinato de su predecesor, Thomas Sankara⁽⁵⁾. La visita de Compaoré no solo se recibió como un insulto entre los admiradores de Sankara, un icono entre los burkineses, sino que desprestigiaba al Estado de Derecho al pasar por alto la sentencia, dejando patente la incompetencia política de la junta.

A mediados de septiembre, tras un pico de violencia terrorista, Damiba decidió apartar al ministro de Defensa y asumir él mismo esta cartera, una decisión que debilitó más aún su imagen, al singularizarlo como único responsable de la seguridad del país. Tras dos ataques especialmente sangrientos, proliferaron las protestas ciudadanas pidiendo su dimisión, una situación que fue aprovechada por algunas facciones descontentas del ejército para, a lo largo de dos caóticos días, forzar la salida del líder de la junta. El 2 de octubre, Damiba dimitió y huyó a Togo. Tras este “metagolpe” de Estado, solo 8 meses después del primero, el capitán Ibrahim Traoré se erigió como nuevo líder de la junta militar, una noticia que fue recibida con júbilo en las calles⁽⁶⁾.

-
- (3) El general Barthelemy Simpore retuvo el puesto ministro de Defensa; Yero Boly, que ya había sido ministro con Compaoré, fue nombrado ministro de Estado.
 - (4) La principal razón tras este enfoque es el escaso éxito que han tenido las sanciones aplicadas a Mali (tras los golpes de Estado de 2020 y 2021 y el desacuerdo sobre el periodo de transición), cuya dureza ha provocado en el país el rechazo generalizado a la CEDEAO (y a la comunidad internacional en general) así como el acercamiento a Moscú.
 - (5) Thomas Sankara fue un revolucionario que presidió Burkina Faso de 1983 a 1987, siguiendo una doctrina antiimperialista y panafricanista. Sus campañas a favor de la autosuficiencia agraria, la alfabetización, la salud pública y los derechos de la mujer lo hicieron extremadamente popular entre los burkineses. Fue depuesto y luego asesinado en un golpe de Estado dirigido por Blaise Compaoré.
 - (6) A ojos de la población, en la que predomina un marcado sentimiento antifrancés, una de las principales diferencias entre ambos líderes era su posición respecto a la relación de Burkina Faso con Francia. Aunque en la práctica no han sido tan distintos, en aquel momento Traoré se percibía contrario a París y muy alineado con Rusia.

Traoré, de solamente 34 años y desconocido para el gran público, representaba al amplio número de mandos intermedios (el rango de capitán que ostenta es considerablemente más bajo que el de teniente coronel) directamente afectados por la incapacidad de la junta para llevar a cabo las muy necesitadas reformas en el ejército. A Damiba, mucho más arriba en la jerarquía militar, se le percibía acomodado en su posición, consumido por las obligaciones diplomáticas (como las negociaciones con la CEDEAO), constreñido por los intereses de las altas esferas, alejado del pueblo y despectivo con sus subordinados. Así, en sus primeras semanas al frente del país, Traoré optó por una serie de gestos simbólicos con los que marcar una clara diferencia con respecto a su predecesor⁽⁷⁾. Además, con el fin de preservar los logros conseguidos con respecto a la CEDEAO, se comprometió a respetar el calendario de transición democrática, y, además (en contraste con la ambigüedad de Damiba), especificó que ni él, ni el primer ministro o el portavoz de la asamblea podrán concurrir a las elecciones. Por otro lado, mantuvo la asamblea legislativa de 71 miembros (aunque redujo significativamente sus extremadamente impopulares salarios) y a parte del gabinete ministerial, nombrando a un nuevo primer ministro, Appolinaire Joachim Kyelem de Tambèla⁽⁸⁾.

El gobierno de Traoré parecía inicialmente débil, en parte porque él y otros oficiales subalternos ahora tenían mayor prominencia que sus superiores en la cadena de mando, a lo que se sumaban las divisiones y el descontento del ejército. No obstante, y aunque por la frecuencia con la que históricamente se han dado golpes de Estado en Burkina Faso no se puede descartar ningún desenlace, Traoré parece estar consiguiendo cierta unidad y respaldo popular y militar. En los primeros meses al frente del país, realizó una enorme reorganización militar y una expansión de las fuerzas auxiliares civiles, conocidas como Voluntarios por la Defensa de la Patria (VDP)⁽⁹⁾. Además, se han suplido muchas de las carencias materiales (armamento y equipamiento) que denunciaba el ejército, lo que ha sido posible gracias a un marcadísimo incremento de la partida presupuestaria dirigida a seguridad (en 2023 equivale al 28,42% del total, 8 puntos porcentuales más que en el año anterior). De forma más arriesgada, Traoré ha ascendido a oficiales de rango medio (como él), con el fin de que puedan trasladar su experiencia sobre el terreno al diseño de estrategias contra los yihadistas, a expensas de otros mandos, por encima en el escalafón, pero considerados incompetentes y corruptos (pero que disponen de poder y contactos).

Aunque se han producido algunos avances (reflejados en la restitución de suministros o la reapertura de escuelas en ciertas zonas), la junta está teniendo dificultades para realizar un progreso contundente en su lucha contra los yihadistas. Oficialmente, un 40% del territorio burkinés se encuentra fuera del control del Estado, aunque algunas fuentes sugieren que esta cifra podría ser más cercana al 60%. Además, Traoré se enfrenta también a las creíbles acusaciones de abusos (ejecuciones sumarias, torturas) contra civiles por parte de ejército y los VDP; aunque se han tomado medidas para atajarlos, recientemente se han producido varios escándalos que indican la persistencia de estos actos. Los esfuerzos gubernamentales por

-
- (7) Entre ellos destacan denunciar la visita de Compaoré como una violación de la independencia judicial o participar en la conmemoración del asesinato de Sankara.
- (8) Tambèla es un abogado, conocido polemista, habitual en la prensa y la televisión burkinesa, que se autodefine "sankarista" y es muy crítico con la corrupción y el nepotismo de los sucesivos gobiernos del país. Es su primer cargo político; previamente había rechazado la invitación de Damiba a participar en su equipo.
- (9) Las VDP son una anomalía normalizada por Kaboré: ante el surgimiento de "milicias de autodefensa", formadas por civiles empujados por un sentimiento de indefensión y abandono por parte de las fuerzas de seguridad, en 2020 se institucionalizó su figura. En la actualidad, el gobierno recluta activamente voluntarios que, tras una breve formación, pasan a apoyar al ejército; en el último llamamiento, se presentaron más de 90.000 personas para la mitad de puestos.

acallar las críticas están empeorando la libertad de prensa en el país (que ha caído hasta la posición 58 en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras⁽¹⁰⁾). Además, el gobierno ha declarado el estado de emergencia en 22 de las 45 provincias del país y ha decretado una “movilización general”, dos decisiones que supeditan ciertas libertades individuales a las necesidades de seguridad. Otros objetivos, como el desarrollo económico, han quedado en un segundo plano. No obstante, la junta y su joven líder (conocido popularmente como IB) mantienen una elevada popularidad entre la población. El enfoque de Traoré, en sus palabras, “guerra total”, es extremadamente popular; apela a un sentimiento de unidad y orgullo nacional y empoderamiento del pueblo, una narrativa populista, pero que le ha otorgado un gran respaldo ciudadano. Gran parte de la población confía en que la paz está cerca, lo que contrasta con la actual coyuntura de seguridad.

El pasado 30 de mayo, el primer ministro, de Tambèla, en un discurso para el parlamento burkinés, declaró que “no podemos organizar elecciones sin seguridad (...); si organizamos elecciones ahora, mientras parte de nuestro territorio es inaccesible, dirán que quien sea elegido lo ha sido ilegítimamente”, sugiriendo la posibilidad de que las elecciones (y, por tanto, el regreso a un régimen civil) se celebren más tarde de la fecha objetivo de julio de 2024. Aunque ni la CEDEAO ni otros organismos internacionales han reaccionado públicamente al comentario, no se puede descartar que la extensión del régimen militar acarree la aplicación de sanciones o el menoscabo de las relaciones exteriores del país. No obstante, dado el precedente de Mali (en el que la aplicación de las sanciones implicó un total aislamiento internacional del país), es dudoso que la CEDEAO quiera que se repita la situación, por lo que cabría la posibilidad de que se acuerde un aplazamiento de las elecciones mientras se recupere la seguridad.

En conclusión, las perspectivas del país en el corto plazo no son alentadoras. Si la junta de Traoré no tiene éxito en la lucha armada contra los grupos terroristas, se abriría la posibilidad de otro golpe de Estado, lo que alimentaría la espiral desestabilizadora. Si los avances contra la insurgencia yihadista son suficientes como para mantener su popularidad, pero no para celebrar elecciones con seguridad en la fecha pactada con la CEDEAO, las sanciones que se podrían imponer serían devastadoras para el estado tan frágil en el que se encuentra el país⁽¹¹⁾. El tercer escenario, el caso en el que las fuerzas armadas recuperan el control total del país en el próximo año y se produce un regreso al régimen civil es, desgraciadamente, el que menos probabilidades tiene de materializarse.

YIHADISMO Y POLARIZACIÓN ÉTNICA

Burkina Faso sufre una gravísima crisis de seguridad y una creciente polarización entre los grupos étnicos y religiosos de conforman su población. Desde 2015 el país está asolado por ataques terroristas a manos de grupos yihadistas provenientes (mayoritariamente) de un muy desestabilizado Mali, lo cual ha alimentado una violencia y una inestabilidad generalizadas. Pese a los enormes esfuerzos del aparato de seguridad (y al apoyo exterior), los atentados aumentan año tras año, y los yihadistas han llegado a controlar una enorme porción del

(10) Burkina Faso ha sido un caso de éxito de la libertad de prensa en África. Alcanzó la mejor posición en el ranking en 2019, en el puesto 36, por encima de países como Italia, Corea del Sur o Estados Unidos.

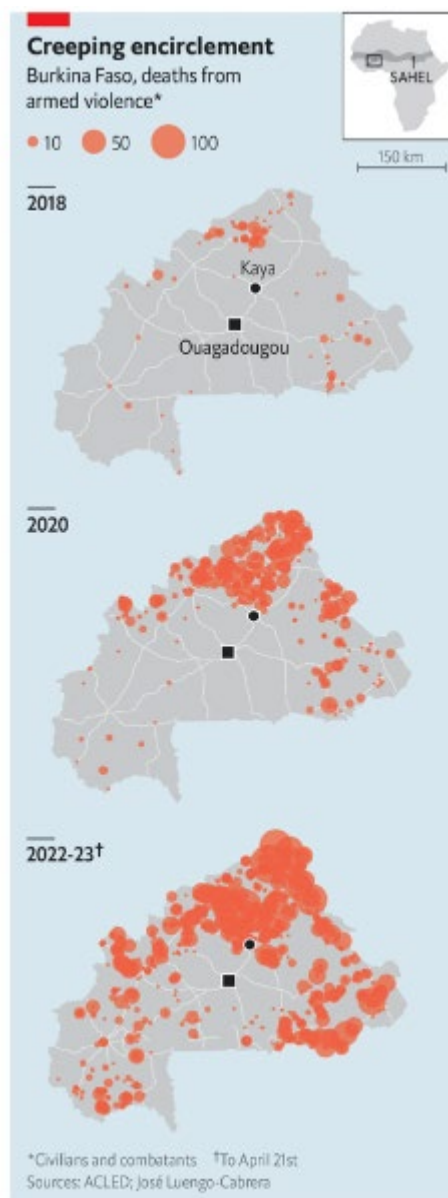
(11) Uno de los principales problemas sería la pérdida de acceso a las reservas conjuntas del BCEAO (Banco Central de los Estados de África Occidental), dadas las reducidísimas reservas monetarias (excluyendo oro) de las que dispone Uagadugú.

territorio. Se concentran principalmente en las regiones del norte y este (colindantes con Mali y Níger), aunque en la actualidad se han extendido también al sur del país (con la intención de acercarse a Togo y Benín) y la única zona todavía libre de asedio continuo es el centro del país. En paralelo a este proceso de extensión territorial, los yihadistas se han hecho con el control de algunas minas artesanales de oro, un lucrativo negocio que les ayuda a financiar sus operaciones. Como consecuencia de la violencia terrorista se calcula que han fallecido más de 10.000 civiles y más de 2 millones de habitantes se encuentran desplazados.

En la actualidad, son dos grupos terroristas los principales responsables de la crisis. El primero, el JNIM (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, en árabe), fundado en Mali y apoyado por Al Qaeda, logró infiltrarse en el norte de Burkina Faso a través del grupo doméstico Ansarul Islam (muy atomizado tras la muerte de su líder, el imán Malam Dicko, en 2017); el segundo es el Estado Islámico del Gran Sahara, más presente en la región este del país, donde se encuentran la frontera con Níger.

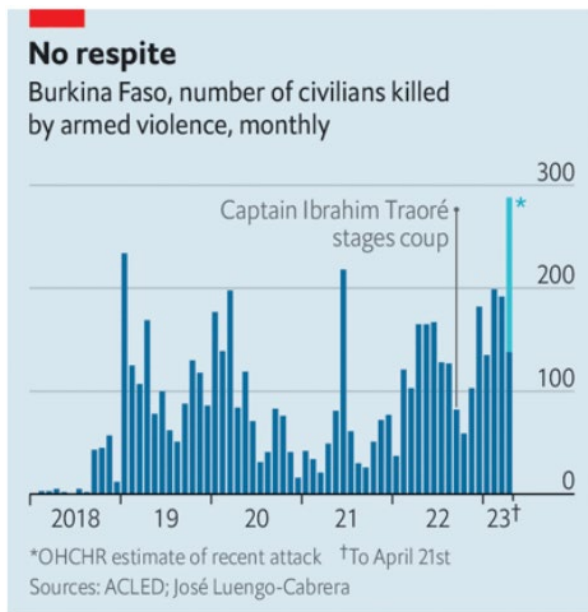
La expansión de estos grupos ha sido posible por múltiples factores, pero destaca especialmente la explotación de las tensiones interétnicas, algo que, además, ha quebrado una convivencia que hasta muy recientemente había sido excepcionalmente pacífica. Los 22 millones de burkineses se dividen en aproximadamente 60 grupos étnicos, pero entre ellos destacan, principalmente, los mossi, que son aproximadamente un 50% de la población, y los fulani, 10% del total, concentrados en el norte del país; la principal religión es el islam (60%), seguida del cristianismo, que predomina en el centro del país, donde se encuentra la capital. Esta distribución ha provocado que la presencia de musulmanes en el sector público y entre los cargos políticos sea inferior a lo proporcional según su población, lo que a su vez ha favorecido la impresión de que sus intereses también están infrarrepresentados. A esto hay que sumar las carencias estructurales de las paupérrimas provincias del norte y este del país (donde se concentra un porcentaje marcadamente mayor de población musulmana), lo que históricamente ha provocado una sensación de abandono en la población local. Aprovechando este descontento, los insurgentes han sido capaces de movilizar a un cierto número de partidarios, que, como consecuencia de la distribución étnica del país, son mayoritariamente de la etnia fulani.

Esto ha provocado la estigmatización de los fulani en su conjunto y el aumento de la tensión intracomunitaria, exacerbada, además, por la aparición de “milicias de autodefensa”, compuestas principalmente por civiles mossi, y su posterior institucionalización al convertirlas, como ya se ha



Fuente: The Economist

mencionado, en un grupo auxiliar de las fuerzas armadas, los VDP, en 2020. Las acusaciones de abusos contra civiles fulani por parte de los VDP y el ejército regular, cada vez más comunes, no han hecho sino aumentar la desconfianza entre etnias y dar munición a los grupos terroristas para convencer de su papel de protectores frente a lo que pintan como un Estado injusto y unos vecinos mossi cada vez más agresivos. Desde el comienzo del mandato de Traoré, que ha reforzado tanto el papel como el número de los VDP, las acusaciones contra las fuerzas armadas se han intensificado, a pesar del compromiso del gobierno de frenar los abusos. Como en paralelo también se asiste a un aumento de los ataques yihadistas, todo ello alimenta la espiral de violencia y socava la narrativa gubernamental que pretende enmarcar los esfuerzos en la lucha contra los terroristas como una “guerra popular”.



Fuente: The Economist

Traoré se niega tajantemente a cualquier negociación con los terroristas, y ha optado por una estrategia de guerra total, intensificando la actividad militar. Aunque esta ha sido también la principal línea seguida por administraciones previas, cabe mencionar que el presidente Kaboré se mostró abierto a la posibilidad de mantener “discusiones con esa gente”, refiriéndose a los insurgentes, ante la aparente imposibilidad de detenerlos por la vía militar. En particular, hay fuentes que recogen “charlas secretas” entre las autoridades y grupos yihadistas a finales de 2020 para negociar una tregua con vistas a las elecciones presidenciales (noviembre de 2020), que se celebraron finalmente sin grandes incidentes, coincidiendo con una importante reducción de los ataques

terroristas. La “calma” se mantuvo brevemente (hasta aproximadamente febrero de 2021), y los líderes de algunas comunidades locales decidieron abrir un diálogo con ciertos grupos, sin lograr ningún éxito duradero. El capitán Traoré ha denunciado recientemente que el alto el fuego de 2020 fue posible gracias a la entrega de “maletines plateados” (implicando la existencia de sobornos) a los yihadistas, y que ello les permitió reforzar su posición, aprovechando la tregua y los ingresos, lo que a la postre ha dañado las posibilidades de derrotarlos en el largo plazo.

Tal y como se ha comentado, el liderazgo de Traoré todavía no se ha traducido en avances palpables en la lucha contra la crisis de seguridad. En 2023, la tendencia alcista de los ataques continúa.

Desde 2015 hasta principios de 2023, en Burkina Faso hubo una amplia presencia militar francesa, como parte de la operación Barkhane, a la que se puso fin a raíz de su limitado éxito contra los grupos terroristas y otras desavenencias entre el gobierno burkinés y el destacamento. En la actualidad, no quedan tropas francesas en el país. Otras iniciativas regionales de coordinación en materia de seguridad tampoco han dado grandes frutos en la lucha contra el yihadismo.

INCERTIDUMBRE EN RELACIONES EXTERIORES, CONDICIONADAS POR LA COOPERACIÓN ANTITERRORISTA

En los últimos años se ha producido un viraje de la política exterior burkinesa, tradicionalmente alineada con Francia y otros socios occidentales, en favor del acercamiento a otras potencias, principalmente Rusia. Las decisiones en esta materia están enormemente influenciadas por las necesidades militares y de cooperación en la lucha contra el yihadismo, pero también por una aversión hacia un Occidente percibido como poco comprometido con los problemas del país.

Hace años que se observa un marcado rechazo de la población hacia Francia y hacia la presencia de sus tropas en territorio burkinés, derivado, por una parte, de un histórico sentimiento anticolonialista y, por otra, de los magros resultados de la operación militar francesa en la lucha contra el terrorismo, que se ha traducido en un deterioro de la relación con París. A partir del primer golpe de Estado de 2022, la discordia con Francia se hizo más clara; la junta militar dirigida por Damiba realizó declaraciones en las que mostraban escepticismo sobre la relación con Francia y planteaban la posibilidad de acercarse a Moscú. No obstante, en la práctica no se realizaron grandes cambios, algo que penalizó a Damiba ante la opinión pública y dio alas a Traoré, que parecía mucho más alineado con Rusia. En Burkina Faso, al igual que en muchos otros países africanos, ha calado entre la población la narrativa rusa por la que Moscú se erige como un aliado incondicional frente a unos países occidentales paternalistas y neocolonialistas. Tras la segunda asonada militar, Traoré consolidó esta tendencia antifrancesa con la expulsión de las tropas galas del país (en febrero de 2023), pero apostó por el mantenimiento de las relaciones diplomáticas con París. El acercamiento a Moscú, en todo caso, ha sido menos mediático (quizá consciente del rechazo internacional que suscitaría la formalización de un acuerdo militar, como ha ocurrido en la vecina Mali), y no está claro su verdadero alcance.

Esto no ha sido suficiente para evitar las acusaciones de colaborar con el denostado grupo paramilitar ruso Wagner, algo que Traoré ha rechazado con vehemencia. De momento, no hay pruebas concluyentes de presencia rusa en el país⁽¹²⁾, aunque el primer ministro Tambahé viajó a Moscú en diciembre de 2022, no haciéndose pública su agenda. Lo que sí se sabe es que la junta militar ha comprado abundante armamento a Rusia (según algunas fuentes, con Bamako de intermediario, al menos en algunas operaciones). De manera indirecta, Traoré ha defendido esta decisión acusando a “otros países” (se asume que se refiere a Francia y otros socios occidentales) de negarse a vender material militar a Uagadugú, lo que en Burkina Faso se considera como una gran traición y un abandono ante los yihadistas. Así, Burkina Faso se ha aproximado a otros socios menos tradicionales, como Turquía (al que también ha comprado armas) o los BRICS.

En el terreno regional, se ha fortalecido la relación con sus vecinos Mali y Guinea, con los que tiene especial afinidad al estar también gobernados por juntas militares y enfrentarse a problemas similares. Además, a raíz del primer golpe de Estado de 2022, la participación de Burkina Faso en la Unión Africana y la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de África Occidental) se ha suspendido, y se teme que la relación pueda empeorar si no se cumplen los compromisos de pronta vuelta a un régimen democrático.

(12) Y, ante la actual incertidumbre sobre el futuro del Grupo Wagner en sí mismo, no se pueden realizar predicciones al respecto.

La relación con las Instituciones Financieras Internacionales siempre ha sido estrecha, aunque a raíz de los acontecimientos políticos de 2022 quedó temporalmente en suspenso, con excepción del Banco Mundial.

En junio de 2023 se anunció que las autoridades burkinesas y el personal del FMI habían llegado a un principio de acuerdo para la firma de un Extended Credit Facility (ECF), por valor de 305 mill.\$ y 4 años de duración (que todavía debe recibir el aprobado final del Directorio del FMI). Poco antes, en marzo de 2023, otorgó financiación por valor de 80,8 mill.\$ para apoyar al país con los desequilibrios de su balanza de pagos relacionados con la crisis alimentaria global (bajo la “Ventana de Shock Alimentario” del programa “Rapid Credit Facility”, RCF). Todo ello señala la confianza del FMI en las autoridades burkinesas y podría animar a otros donantes a retomar la actividad en el país.

Cabe destacar que EEUU, que tradicionalmente había sido un gran donante de ayuda al desarrollo del país, ha excluido a Burkina Faso del programa de libre comercio AGOA, que otorgaba a las exportaciones burkinesas acceso preferencial al mercado estadounidense, por el “cambio inconstitucional” en su gobierno.

2. EVOLUCIÓN ECONÓMICA

- ➔ Burkina Faso adolece de una estructura económica poco diversificada, un clima de negocios deficiente, un elevado peso de la economía informal y graves carencias en las infraestructuras de transporte y energía.
- ➔ Pese a estas limitaciones, ha experimentado periodos de crecimiento económico muy elevado (en torno al 6%), impulsados por la producción de oro, el gasto público y el consumo. Esta tendencia se ha visto frenada únicamente por acontecimientos de gran magnitud, como el impacto de la pandemia en 2020 o la grave crisis política de 2022, pese a los que, no obstante, el crecimiento continuó arrojando datos positivos.
- ➔ En 2023 y 2024 se espera que el ritmo de crecimiento se acelere, gracias al mayor desarrollo de la industria aurífera, la recuperación del sector agrario y una coyuntura económica internacional más favorable para Burkina Faso.

ESTRUCTURA POCO DIVERSIFICADA

Burkina Faso es un país pobre y poco desarrollado, con un PIB que alcanzó en 2022 los 20.200 mill.\$. El PIB per cápita en 2022 ascendía únicamente a 840 \$, una de las cifras más bajas del mundo.

La economía burkinesa está poco diversificada y su estructura corresponde a un país en desarrollo. Está compuesta principalmente por empresas de pequeño tamaño y muy reducida rentabilidad, mientras que las empresas de mayor tamaño o bien son de propiedad estatal o extranjeras (en este caso, mayoritariamente del sector minero). El clima de negocios es muy

pobre⁽¹³⁾ y la economía informal representa aproximadamente el 80% del total. También sufre de severas deficiencias en cuanto a la infraestructura de transportes y el aprovisionamiento de energía, y se ve obligado a importar aproximadamente el 70% de la electricidad que consume de sus vecinos Ghana y Costa de Marfil. La actividad económica se concentra de forma muy marcada en la capital, Uagadugú, y, en menor medida, en la segunda ciudad del país, Bobo-Dioulasso (a 300 km de distancia).

| | |
|-----------------|----------------|
| PIB | 20.200 mill.\$ |
| CRECIMIENTO PIB | 2,5% |
| INFLACIÓN | 14% |
| SALDO FISCAL | -10,3 |
| SALDO POR C/C | -5,2 |

Datos a 2022

El algodón que, aunque ha ido perdiendo peso y por sí solo representa únicamente el 3% del PIB, es el segundo producto de la exportación, colocando a Burkina Faso entre los 10 principales productores del mundo (el segundo del continente africano, tras Benín).

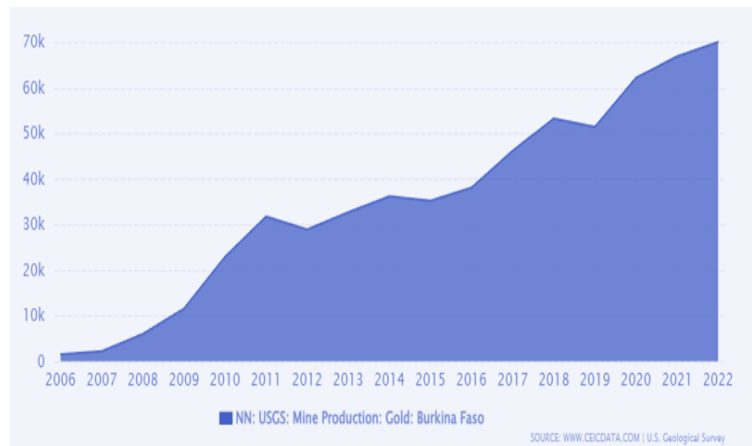
El sector primario tiene un peso muy importante en la economía (aproximadamente un 30% del PIB). La producción agrícola se compone principalmente de cultivos de subsistencia, en los que está empleada aproximadamente el 80% de la población. El país es extremadamente vulnerable a las sequías y otros fenómenos climáticos. El cultivo más importante es el

El sector secundario representa aproximadamente el 25% del PIB, y tradicionalmente estaba compuesto por industrias de manufacturas ligeras (transformación del algodón y producción de bienes de consumo). No obstante, desde comienzos del siglo XXI se ha desarrollado rápidamente una industria minera centrada en la extracción de oro, que ha ganado una enorme importancia en la economía. Aunque la mayoría de las minas son pequeñas y se trabajan de forma artesanal, también existen grandes excavaciones explotadas por empresas internacionales que obtienen importantísimos ingresos. El oro es el principal producto de exportación y Burkina el 14º productor mundial del metal, con un máximo histórico de 70 toneladas en el año 2022. Este resultado se ha logrado gracias a la apertura de nuevas minas, que a su vez son el principal polo de atracción de la inversión extranjera, y a pesar de las amenazas a las que se enfrenta el sector. Dentro de ellas, destacan los ataques yihadistas contra algunas explotaciones, con el objetivo tanto de hacerse con su control, en el caso de las más pequeñas, como de sembrar el caos, en aquellas explotadas por grandes empresas; en varios casos se han visto obligadas a suspender temporalmente su actividad⁽¹⁴⁾. A esto se suma el tráfico ilegal del mineral con fines de evasión fiscal, ya que se aplican aranceles a la exportación (que suponen una importante partida de los ingresos públicos). Dentro del sector minero, cabe destacar que entre 2006 y 2022 estuvo en funcionamiento una importante explotación de zinc.

(13) Según el *ranking* Ease of Doing Business del Banco Mundial, que estudiaba el clima de negocios, en 2020 Burkina Faso ocupaba la posición 151 de 190 países. El Banco Mundial abandonó la publicación del Doing Business en 2020 por un escándalo relacionado con presiones políticas en su elaboración. Actualmente, el organismo se encuentra en fase de desarrollo de un nuevo índice que provea también de información sobre el entorno de negocios de un país, pero aún no se ha publicado. Así pues, en ausencia de otro indicador disponible, se recurre al DB de 2020 como referencia.

(14) Las autoridades llegaron a verse obligadas a cerrar algunas minas artesanales para evitar que los grupos terroristas las explotasen para financiar sus actividades. Este enfoque tuvo consecuencias no deseadas: al menos en un caso del este del país, al eliminar el medio de vida de los mineros locales, estos apoyaron a los yihadistas, que prometieron (y consiguieron) la reapertura de alguna de ellas (como la de Kabonga).

Producción de oro (mill. Kg)



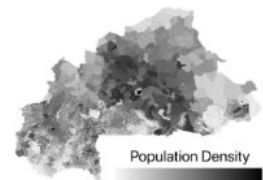
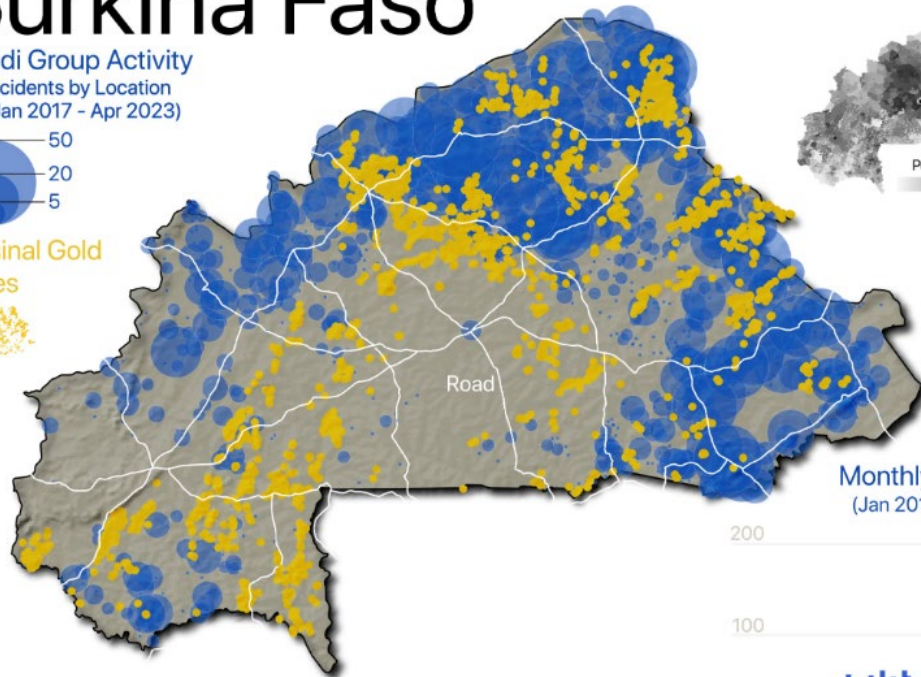
Fuente: Ceicdata.com

Burkina Faso

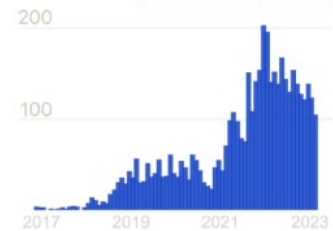
Jihadi Group Activity
Incidents by Location
(Jan 2017 - Apr 2023)



Artisinal Gold Mines



Monthly Incidents
(Jan 2017 - Apr 2023)



Data: ACLED, ANEEMAS & WorldPop
Visual: José Luengo-Cabrera

COYUNTURA ECONÓMICA MARCADA POR MOTIVOS POLÍTICOS

En la última década Burkina Faso ha registrado un crecimiento económico notable, aunque irregular, debido tanto a factores externos, como el impacto del covid-19 o la guerra de Ucrania, como internos, producto de la inestabilidad política.

Tras los años 2014 y 2015, en los que la agitada situación del gobierno lastró el comportamiento de la economía, Burkina Faso experimentó un periodo de expansión: entre 2016 y 2019 el PIB

aumentó de media un 6,2% anual, impulsado por el desarrollo de la industria áurea, el consumo privado y el gasto público.

El impacto de la pandemia de covid-19 puso fin a esta tendencia. Afortunadamente, el virus no causó grandes estragos en el país, pero la recesión de la economía global produjo una marcada desaceleración del crecimiento que, no obstante, siguió siendo positivo, gracias al encarecimiento del oro y el descenso en la cotización del petróleo. En 2021, como sucedió en muchos otros países, la recuperación postpandemia impulsó de nuevo el crecimiento de la economía.

No obstante, la inestabilidad política y el empeoramiento de la crisis de seguridad que definieron el 2022 se tradujeron nuevamente en un frenazo. Aunque los gobiernos militares han mantenido la continuidad de las políticas económicas de sus predecesores democráticamente elegidos, la incertidumbre en el entorno empresarial, el cierre de minas de oro y zinc, la mala cosecha como consecuencia de la sequía que afectó a todo el Sahel, la interrupción de los proyectos de construcción y el desplazamiento forzoso de un elevado número de ciudadanos fueron factores internos que supusieron un freno de la actividad económica. A ello, además, es necesario sumarle la incertidumbre global a raíz del estallido de la guerra en Ucrania, que provocó un marcado incremento de los precios del crudo, de los alimentos y los fertilizantes. Todo ello resultó en un crecimiento del PIB en 2022 de únicamente el 2,5%.

Planes quinquenales:

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES)

El eje central de la política económica de Burkina Faso son los planes quinquenales, denominados PNDES. Son la base sobre la que se establecen los objetivos últimos de las decisiones gubernamentales, con el fin de conseguir una actuación consistente que permita superar los importantes desafíos a los que se enfrenta el país.

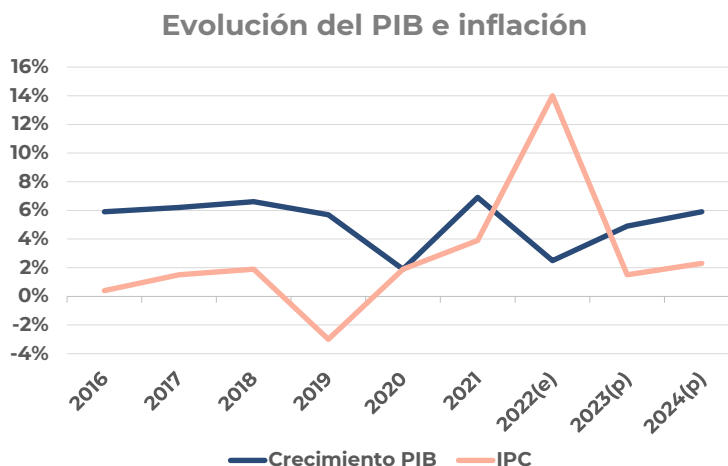
El plan quinquenal 2016-2020 fue muy ambicioso, motivado por el rupturismo de la administración de Kaboré tras el largo mandato de Compaoré; aunque no logró la mayoría de sus objetivos y la pandemia perjudicó la consecución de muchos de ellos, ejerció un considerable estímulo.

En la actualidad está en marcha el PNDES 2021-2025, que tiene como finalidad “restablecer la seguridad y la paz, reforzar la resiliencia de la nación y transformar estructuralmente la economía burkinesa, para un crecimiento fuerte, inclusivo y duradero”. Para ello reconoce adecuadamente las debilidades del país y establece una serie de objetivos concretos para conseguir la mejora de las condiciones de vida de la población y el desarrollo de la economía, como el incremento del peso de la industria en el PIB, la disminución de la tasa de pobreza, o el aumento de la recaudación fiscal.

La evolución de la economía en la actualidad continúa lastrada por la violencia yihadista y la inestabilidad política. Pese a todo, se anticipa que el crecimiento del PIB se va a acelerar gracias a los sectores minero y agrario, como consecuencia de la apertura de nuevas explotaciones de oro y una mejor cosecha, respectivamente. Además, los elevados niveles de inversión pública (con respecto a la serie histórica), como parte de la implementación del PNDES, influyen favorablemente. En el plano exterior, la mejora en la coyuntura económica internacional también tiene un efecto positivo. En conjunto, se prevé que la economía crecerá un 4,9% en 2023.

Aunque la incertidumbre sobre la evolución económica del país a medio plazo es enorme, y está supeditada a la crisis de seguridad y a la estabilidad política, en general se espera que la

tendencia positiva continúe. Así, en 2024 se prevé un 5,9%, gracias, de nuevo, a la industria aurífera (que podría llegar a expandirse un 12%) y a la agricultura.



Burkina Faso ha experimentado históricamente una reducida inflación, en gran parte debido a su pertenencia a la Zona Franco CFA, al estar esta divisa ligada al Euro a través de un tipo de cambio fijo cuya convertibilidad está garantizada por el Tesoro Francés. No obstante, en 2022 la inflación se disparó debido al incremento de los precios internacionales del petróleo y los alimentos, a lo que se sumó la mala cosecha y la interrupción de las rutas comerciales domésticas debido a la inseguridad. Todo ello conllevó que en 2022 el dato de inflación alcanzase un 14% en promedio, una cifra particularmente alta para un país de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA)⁽¹⁵⁾. Tras experimentar su máximo en agosto de 2022, los datos de inflación mensuales se han reducido a gran velocidad y, en 2023 se espera que no llegue al 1,5%, por debajo del objetivo del Banco Central de los Estados de África Occidental (BCEAO). En marzo de 2023 el BCEAO aumentó el tipo de interés de referencia hasta el 3%, la cuarta subida en 9 meses.

El fortísimo encarecimiento de los alimentos en los últimos 18 meses ha causado una grave crisis alimentaria, todavía en curso, que la junta militar ha intentado amortiguar a través de medidas fiscales. Además, ha contado con el apoyo del FMI a través de financiación de emergencia por valor de 80 mill.\$ (bajo el marco RCF). El FMI calcula que el coste de abordar esta crisis pueda alcanzar el equivalente al 3,5% del PIB. Como ya se ha mencionado, en junio de 2023 las autoridades burkinesas han alcanzado un preacuerdo de apoyo financiero (del tipo ECF) por valor de 300 mill.\$.

SECTOR FINANCIERO

El sistema bancario burkinés está formado por 14 bancos y 3 instituciones de crédito, así como una red de instituciones de microfinanciación. La mayor parte de la financiación se restringe al corto plazo y las empresas pequeñas todavía tienen grandes dificultades para acceder al

(15) Burkina Faso forma parte de la UEMOA, junto a Benín, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo.

crédito, aunque el tipo de interés aplicado se sitúa en torno al 7%, en línea con otros países de la UEMOA.

Uno de los principales problemas del sector financiero es la concentración de activos: los tres bancos de mayor tamaño reúnen aproximadamente el 60% de los activos, mientras que la exposición del crédito a los 5 mayores prestatarios es del 81%. No obstante, se considera que el sistema bancario es sólido, con una ratio de adecuación del capital del 13,6%, una morosidad de únicamente el 6,6% y un nivel de provisiones elevado (75,6%). Además, en 2022, la deceleración del crecimiento del crédito al sector privado, provocada por la interrupción de los proyectos de construcción (sector que concentra un 17% de los préstamos), llevó a una ligera mejora en los indicadores de liquidez (ratio de activos líquidos del 20,6%), que en los últimos años se habían deteriorado.

3. SECTOR PÚBLICO

- ➔ Crónicos déficits, acentuados en los últimos años a raíz del incremento del gasto público por el impacto de la pandemia, las mayores necesidades armamentísticas y los crecientes subsidios a alimentos y energía.
- ➔ En 2022 el desequilibrio fue del 10,3% del PIB, una cifra muy elevada, precipitada por la desfavorable coyuntura económica y política.
- ➔ Viraje en la composición de la financiación, que está pasando de ser mayoritariamente concesional y a largo plazo, hacia la deuda doméstica, a corto plazo y más cara.
- ➔ Deuda pública moderada (54,3% del PIB). El calendario de los próximos 3 años obligará a dedicar una cifra creciente de recursos al servicio de la deuda. El último DSA del FMI, publicado en marzo de 2023, considera que el riesgo de insostenibilidad de la deuda es moderado, dada la incertidumbre que rodea a la economía burkinesa.

Burkina Faso sufre crónicos desequilibrios presupuestarios, que se explican por un sistema fiscal infradesarrollado, con un nivel de ingresos muy bajo, y por el gran peso de la economía informal. Los déficits son habitualmente elevados, y no cumple con el objetivo de la UEMOA (desequilibrio máximo del 3% del PIB) desde el 2015. Además, las cifras han empeorado en los últimos años: el impacto de la pandemia, la lucha contra el yihadismo y, más recientemente, la crisis alimentaria y el encarecimiento del petróleo han obligado a las autoridades a aplicar una política fiscal expansiva pese a las limitaciones a las que tienen que hacer frente.

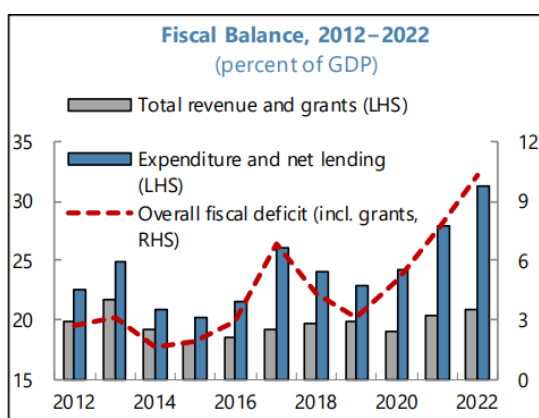
Pese a los intentos de incrementar la recaudación fiscal, objetivo que formaba parte tanto del PNDES como de las reformas pactadas con el FMI (en anteriores programas, como el ECF concedido en 2018), apenas se ha conseguido aumentar con respecto al PIB. En 2022 se alcanzó la cifra más alta de la última década, el 21% del PIB, pese a la menor recaudación del sector aurífero, gracias al aumento de la recaudación arancelaria como consecuencia de los altos precios de las importaciones y de un mayor control en aduanas.

En cambio, la partida de gastos ha aumentado de forma constante en el último lustro. El elevado presupuesto de defensa, derivado de las necesidades militares y armamentísticas, es

una de las razones (equivale aproximadamente al 4,6% del PIB), a lo que se suman las medidas tomadas para amortiguar la crisis inflacionaria en un contexto político particularmente frágil. Para proteger a la población del impacto del encarecimiento de los alimentos (tanto por la mala cosecha de 2022 como por el efecto de la guerra de Ucrania en sus precios) se introdujeron una serie de subsidios (a los fertilizantes, equivalente al 0,6% del PIB, semillas, etc.), así como transferencias de efectivo a los hogares más vulnerables y distribución de comida gratuita. A ello se suma el coste fiscal de los subsidios al crudo, que se multiplicó casi por cuatro, hasta el 4,9% del PIB. El gasto en salarios públicos se ha moderado levemente (8,3% del PIB), y ha sido superada por los gastos corrientes como la principal partida presupuestaria. En conjunto, el gasto público ascendió en 2022 hasta el 31,3% del PIB, 3,4 puntos porcentuales más que el ya elevado dato del año previo.

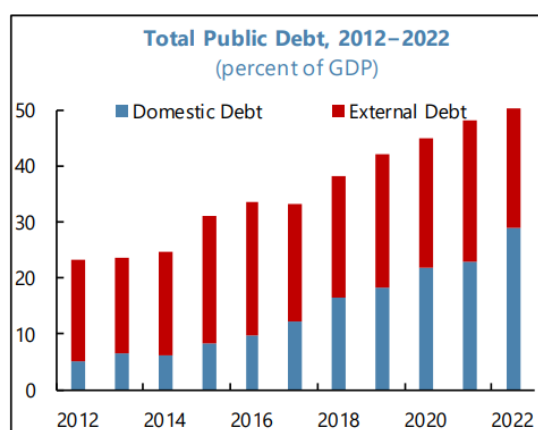
Así, el desequilibrio presupuestario en 2022 fue del 10,3%, una cifra muy alta. Su financiación se ha realizado a través de la emisión de letras y bonos del Tesoro⁽¹⁶⁾, préstamos sindicados, retiradas de depósitos gubernamentales del BCEAO (equivalente al 1,8% del PIB), y una deuda con la compañía energética estatal por valor del 1,7% del PIB en subsidios no pagados. Esto representa, en la práctica, un viraje hacia una financiación doméstica y no concesional, mucho más cara que el apoyo presupuestario al que tradicionalmente han tenido acceso.

En 2023, se espera que el déficit fiscal se mantenga muy elevado, aunque previsiblemente disminuirá hasta el 7,8% del PIB, de nuevo por el gasto en defensa y los subsidios a la alimentación y los combustibles. Las expectativas de que las presiones fiscales se mantengan en el medio plazo retrasa las esperanzas de alcanzar el criterio de convergencia de déficit de la UEMOA hasta 2027. Si continúa la casi total ausencia de ayuda exterior por la inestabilidad política, y sin reformas contundentes del sistema fiscal, las autoridades se verán obligadas a recurrir, de nuevo, a financiación cada vez más cara. Así pues, la actual la senda fiscal acarrea riesgos significativos y podría poner en peligro el crecimiento económico y la sostenibilidad de la deuda.



Note: Figures for 2022 are projections

Source: Burkinabe authorities; and IMF staff calculations



Fuente: FMI

(16) A través del mercado regional de bonos de la UEMOA. Toda deuda denominada en Francos CFA se considera doméstica.

Gracias a las condonaciones de la deuda en el marco de la iniciativa HIPC, el endeudamiento público de Burkina Faso se redujo en 2006 hasta el 22% del PIB. Desde entonces, los recurrentes déficits fiscales han provocado que la deuda pública haya crecido de manera constante, aunque suavizada por los buenos datos de crecimiento del PIB, hasta alcanzar el equivalente al 54,3% del PIB. Esta cifra es todavía manejable y se sitúa por debajo del umbral de la UEMOA (70% del PIB), pero la tendencia al alza y el cambio en su composición (hacia deuda más cara y con menores plazos, aunque principalmente doméstica) han provocado cierta preocupación sobre su futura sostenibilidad. La mayor parte del endeudamiento está todavía contraído en términos concesionales y con vencimientos a largo plazo, pero el país se está viendo obligado a aceptar financiación más cara, tanto por el endurecimiento de las condiciones financieras globales como por su peor situación interna.

El calendario de pagos de los próximos años será más complicado de lo habitual, con un pico de amortizaciones de deuda doméstica que superará el equivalente al 11% del PIB entre 2025 y 2027. Pese a ello, el DSA (Debt Sustainability Analysis) del FMI, publicado en marzo de 2023, establece que el riesgo de insostenibilidad de la deuda pública es todavía moderado, aunque se encuentra cerca del umbral de riesgo "alto", debido a la incertidumbre que rodea la coyuntura doméstica. No obstante, sólo se supera el umbral de riesgo en la prueba de estrés más extrema (severo impacto negativo de los precios de las *commodities*), lo que ilustra la vulnerabilidad a la evolución de los precios de sus principales exportaciones. El FMI destaca que la capacidad de endeudamiento del país es de un nivel medio y su capacidad para absorber *shocks* es limitada.

La única de las principales agencias de rating que califica la deuda de Burkina Faso es Standard & Poor's, que tras el primer golpe de Estado de 2022 la degradó dos escalones, a la categoría CCC+, siete por debajo del grado de inversión. Este rating se conoce como "grado especulativo", e indica que el país "depende de condiciones favorables para cumplir con sus obligaciones financieras".

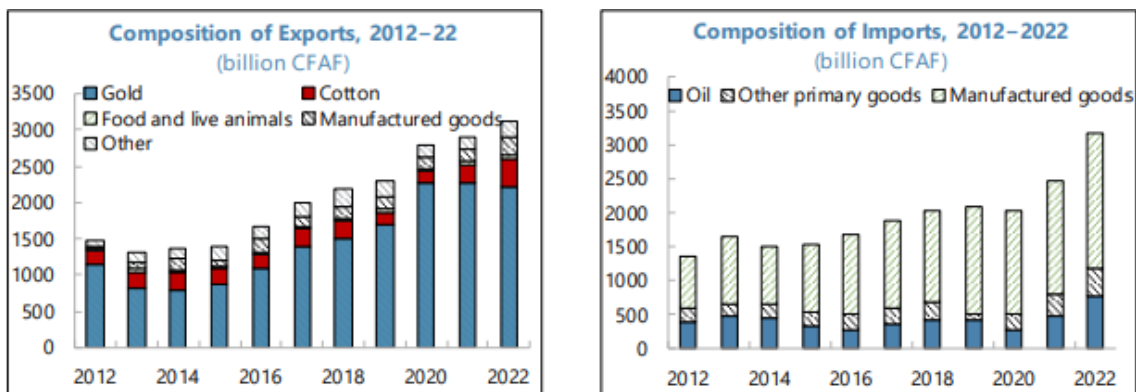
4. SECTOR EXTERIOR

- Sector exportador poco diversificado y vulnerable a la evolución de los precios de las *commodities* que exporta, que son principalmente oro (cuarto productor del continente) y, a mucha distancia, algodón.
- En 2022 las exportaciones tuvieron un valor de 5.200 mill.\$, mientras que las importaciones alcanzaron los 5.300 mill.\$. En conjunto, la balanza comercial arrojó un déficit de apenas un 0,3% del PIB. La balanza por cuenta corriente registró un desequilibrio del 5,2% del PIB en 2022, por encima de sus habituales niveles.
- La deuda externa equivale al 25,3% del PIB, un nivel reducido y que lleva años estable. Está contraída con acreedores bilaterales y multilaterales, y aproximadamente un tercio es en términos concesionales. El servicio de la deuda es del 3,9% de los ingresos externos corrientes.
- En el último DSA, el FMI califica el riesgo de insostenibilidad de la deuda externa de Burkina Faso como moderado, aprobando todas las pruebas de estrés a las que se ha sometido.

El sector exportador de Burkina Faso está muy poco diversificado y es muy vulnerable a la evolución de los precios internacionales de sus principales exportaciones, de las que es muy dependiente. El grado de apertura de Burkina Faso es del 51%, un nivel moderado en comparación con otros países de la región y que se ha mantenido constante en los últimos años. Además, sus características geográficas (no tiene acceso al mar) y la inestabilidad de la región en la que se encuentra (que ha afectado negativamente a las rutas de transporte) dificultan aún más el comercio internacional.

Desde el comienzo de su explotación, el oro se convirtió en el principal producto de exportación del país, suponiendo por norma alrededor del 70% del total. A mucha distancia, en segundo lugar, se encuentra el algodón, que todavía retiene una cuota del 12%. A continuación, se solía encontrar el zinc, pero el agotamiento de la mina que explotaba este metal ha eliminado esta fuente de ingresos externos. El resto de las exportaciones son mayoritariamente productos agrícolas (semillas, frutos secos, etc.). Suiza es el destino de la mayor parte de la exportación (ya que compra prácticamente la totalidad del oro), seguido de India, Singapur, Costa de Marfil, Mali, y otros países del Sahel. En 2022, las exportaciones de oro se mantuvieron constantes, mientras que las de algodón aumentaron un 50% con respecto al año previo. En total, se vendieron productos al exterior por valor de 5.200 mill.\$, equivalente al 25,6% del PIB, en línea con ejercicios anteriores.

Las importaciones, por otro lado, muestran una mayor diversificación. La principal partida es el petróleo (un 24% del total), seguido de medicamentos, electricidad, cemento, alimentos, y una larga lista de todo tipo de productos manufacturados que no se fabrican en el país. El principal origen de las importaciones es China, aunque representa únicamente un 12,9% del total, seguido de Costa de Marfil (donde se obtiene gran parte de la energía que consume), Francia, Ghana e India. Las importaciones alcanzaron en 2022 los 5.300 mill.\$, un 28% más que el ejercicio anterior, debido, principalmente, al encarecimiento del petróleo.



Fuente: FMI

En conjunto, la balanza comercial registró un déficit de apenas un 0,3%, una cifra muy reducida pero que se aleja de los superávits que habitualmente presenta el país y que suelen compensar los desequilibrios de otras balanzas. Este es el caso de la de servicios, que en 2022 arrojó un déficit del 4,2% del PIB, una cifra en línea con otros ejercicios y que se explica principalmente por las necesidades de los proyectos mineros, al igual que la balanza de rentas primarias (-3% del PIB), resultado de la repatriación de beneficios de las empresas extranjeras presentes en el país. Por el contrario, la de rentas secundarias muestra un también habitual superávit, en gran parte por la recepción de ayuda al desarrollo.

Con todo, la cuenta corriente arroja un déficit del 5,2% del PIB en 2022, un nivel por encima de los años anteriores, en los que se había beneficiado del elevado precio del oro y del abaratamiento del petróleo. Se anticipa que en los próximos ejercicios el déficit se mantenga, aunque con cifras más reducidas (4,4% en 2023), gracias a los superávits comerciales que se esperan como consecuencia del desarrollo de la industria aurífera.

Los desequilibrios externos se han financiado tradicionalmente a través de donaciones e inversión extranjera directa (IED). No obstante, en los últimos años los acontecimientos han propiciado que esta situación cambie. Así, se ha asistido a un proceso de desinversión, con salidas netas de capital, tanto de inversión en cartera, como otra inversión privada. En 2022 la IED ha sido positiva (por los proyectos mineros), pero la inversión privada en conjunto ha sufrido un resultado negativo de gran magnitud.

Todo ello ha supuesto una enorme presión sobre los activos del Banco Central. Así, las reservas internacionales en Uagadugú se encuentran bajo mínimos, siendo equivalentes (sin contar el oro, del cual puede disponer en abundancia)⁽¹⁷⁾ a únicamente 0,2 meses de importaciones. Esta cifra dejaría al país en quiebra si no tuviera acceso a las reservas conjuntas del BCEAO, que, con un valor de 6.000 mill.\$, equivalen a 4,5 meses de importaciones de la región, por encima del mínimo recomendado de 3 meses. Cabe repetir que el riesgo de transferencia está aminorado por la plena convertibilidad del Franco CFA que garantiza el Tesoro francés. No obstante, la situación del país es de extrema fragilidad. Si la situación política empeora y la CEDEAO llegara a imponer sanciones que afecten al acceso a las reservas del BCEAO, al país le sería prácticamente imposible hacer frente a ningún tipo de pago al exterior.

(17) En febrero de 2023, las autoridades requisaron un total de 500 kg de oro de dos minas; esto está recogido en las leyes mineras del país, que permite al gobierno la requisa de oro para necesidades públicas a precio de mercado. La modalidad de pago y los motivos de las autoridades se desconocen.

DEUDA EXTERNA Y SERVICIO REDUCIDOS; DSA MODERADO

Burkina Faso ha refinanciado en cinco ocasiones con los acreedores representados en el Club de París y se ha beneficiado de múltiples iniciativas de alivio de la deuda, entre las que destaca la iniciativa HIPC, en la que se alcanzó el punto de culminación en 2002. Más recientemente, el país se pudo acoger a la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G20, que le permitió retrasar el pago de 14 mill.\$ durante la fase más aguda de la pandemia.

En 2022 la deuda externa de Burkina Faso equivale al 25,3% del PIB, un nivel que se mantiene relativamente estable desde hace una década. Es en su totalidad de propiedad pública o garantizada por el Estado y aproximadamente un tercio está contraído en términos concesionales. Está contraída únicamente con acreedores públicos: un 88% con multilaterales y el restante de carácter bilateral. En 2022 la ratio del servicio de la deuda con respecto a los ingresos externos corrientes fue del 3,9%, un dato reducido.

En el último análisis de sostenibilidad de la deuda, que data de marzo de 2023, el FMI considera que la deuda externa de Burkina Faso presenta un riesgo moderado de insostenibilidad. Cabe destacar que esta calificación obedece a la elevada incertidumbre que rodea la evolución macroeconómica del país, motivo por el cual se deteriora el resultado de los *tests*, que adjudican al país un riesgo “bajo” de insostenibilidad de la deuda externa. El endeudamiento externo no supera el umbral de riesgo en ninguna de las pruebas de estrés realizadas, ni siquiera en la más dura (*shock* en el precio de las *commodities*).

El FMI identifica como principales factores de riesgo para la sostenibilidad de la deuda la expansión de los gastos necesarios para contener la crisis de seguridad, así como la crisis alimentaria; el escaso apoyo de los donantes y la mayor dependencia del mercado de bonos regionales, más caros y con plazos de vencimientos cortos; y finalmente, la estrecha base exportadora, que entraña una elevada vulnerabilidad a los *shocks* de precios externos.

5. CONCLUSIONES

- El principal riesgo político es la violencia terrorista. Aunque intuitivamente se perciba que los golpes de Estado son catalizadores de una mayor inestabilidad política, cabe decir que la actuación de la junta militar ha sido sensata y se ve (al menos parcialmente) legitimada por el elevado grado de popularidad que tiene el actual líder de la misma entre la población burkinesa; lo cierto es que se está afrontando la extrema amenaza a la que se enfrenta al país de una forma mucho más contundente y decidida.
- El voto de confianza que ha dado el FMI, tanto con la aprobación del RCF como con el preacuerdo ECF, constituye el primer paso para la recuperación del apoyo internacional. Esto podría abrir las puertas a nueva ayuda financiera y un menor riesgo de aplicación de sanciones.
- Se anticipan buenos datos de crecimiento económico, aunque estén supeditados a la incertidumbre política. El aumento de la producción aurífera, la aplicación de los planes

quinquenales y una coyuntura económica internacional más favorable a los intereses burkineses respaldan las positivas predicciones.

- Tanto el desequilibrio presupuestario como el déficit por cuenta corriente han sido muy elevados en los últimos ejercicios, debido a los esfuerzos contra el terrorismo y el encarecimiento de los alimentos y el petróleo. Se espera que en los próximos años las condiciones en ambos aspectos mejoren, lo que permitirá que se aminoren los desequilibrios.
- La deuda pública de Burkina Faso es moderada y, aunque se está produciendo un negativo cambio en su composición, el riesgo de insostenibilidad que aprecia el FMI en su último DSA es todavía moderado.

© CESCE, S.A. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial, la distribución o comunicación pública de este documento, así como la edición de todo o parte de su contenido a través de cualquier proceso reprográfico, electrónico u otros sin autorización previa y expresa de su titular. La información contenida en este documento refleja exclusivamente comentarios y apreciaciones propias de esta Compañía, por lo que CESCE declina cualquier tipo y grado de responsabilidad por el uso incorrecto o indebido de dicha información.